

Desde hace casi tres años las comunidades negras del Cauca -inspirados en la guardia de San Basilio de Palenque- tratan de consolidar un grupo que defienda la autonomía y la soberanía de sus territorios.

“Sin territorio no hay vida”. Con esta frase, Sandra*, una joven y entusiasta guardia cimarrona, explica las razones por las cuales su pueblo decidió organizarse para defender el fruto que tras cientos de años de lucha consiguieron sus ancestros. Estas comunidades viven en zonas apartadas de Suárez, Buenos Aires, Santander de Quilichao, López de Micay o Guapi que históricamente han sido apetecidas por grupos armados ilegales que buscan sacar ventaja de sus bondades geográficas para la guerra.

Fue gracias a la Constitución Política de 1991 y, posteriormente, a la Ley 70 de 1993, que estas comunidades étnicas pudieron liderar diferentes procesos para que se reconocieran los territorios colectivos, se respetaran las tradiciones y se legitimara su forma de autogobierno. Ha sido un proceso que también les permitió crear un sistema de blindaje ante la violencia conocido como la Guardia Cimarrona.

“La creamos para proteger el territorio de manera autónoma, donde la misma gente de la comunidad brinda protección, donde se puede tener un buen vivir de acuerdo a nuestras tradiciones y donde no sean los foráneos quienes impongan lo que se ejerce en él” dice Jorge*, uno de sus integrantes más activos.

El punto de partida para esta iniciativa territorial fue el Primer Congreso Nacional del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero, que se realizó entre el 23 y el 27 de agosto de 2013, en Quibdó, Chocó, y al que llegaron más de siete mil líderes para conmemorar los 20 años de promulgación de la Ley 70 y para “mandatar” sobre su destino.

Armando Caracas Carabalí, miembro del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), cuenta que en ese espacio compartieron experiencias con miembros de la Guardia Cimarrona de San Basilio de Palenque, quienes los inspiraron a crear su propia guardia para encargarse del cuidado de sus consejos comunitarios.

A pesar de las dificultades económicas y logísticas, desde ese momento las comunidades han realizado seis talleres para formar a sus guardias y han empezado a elaborar sus elementos distintivos. Tal como sucede con la Guardia

Indígena del pueblo Nasa, con quienes también han compartido experiencias sobre defensa del territorio, cuentan con sus propios chalecos, pero en vez de empuñar bastones de mando, llevan peinillas sin filo adornadas con los colores de la bandera de Sudáfrica porque muchos de los esclavos que llegaron a Cauca procedían de las tribus de ese país.

Caracas reconoce que no en todos los municipio hay guardias pues se trata apenas de un proceso naciente que debe ser fortalecido: “la Guardia es departamental y tiene 840 miembros, pero hay activos 240 que se mueven en toda la dinámica de protección (...) cada consejo comunitario, como mínimo, debe tener a una persona que haga recorridos y sepa qué pasa en el territorio”, dice.

Varios de esos integrantes o líderes se curtieron en la defensa del territorio desde finales de la década del 90, con los embates de las guerrillas y los paramilitares a la región. El miembro del PCN y Aconc recuerda que para esa época fue creado un Comité de Derechos Humanos que tuvo que enfrentar la arremetida del Bloque Calima de 2000 a 2004 y las posteriores acciones de las Farc. En ese periodo sus integrantes, varios de ellos hoy en la Guardia Cimarrona, encararon a jefes paramilitares y guerrilleros para quitarles menores de edad que fueron reclutados o pedirles que se fueran de sus territorios.

Hoy en día, la minería ilegal es la amenaza más grande en los territorios afros: Timbiquí, Teta, Mazamorrero, son solo tres de los ríos saqueados. Las tierras también están arrasadas. “Nosotros respetamos la naturaleza y tenemos una lógica diferente: ir, sacar lo que se necesita y dejar para las futuras generaciones, porque nuestro ahorro está en la tierra”, indica Sandra.

Las afectaciones causadas por la minería ilegal son tan grandes que en diciembre del año pasado, más de 60 mujeres del norte de Cauca marcharon hasta Bogotá acompañadas por varios integrantes de la Guardia Cimarrona para denunciar la tragedia. Pese a que el gobierno suscribió una serie de acuerdos, Sandra cuenta que poco se ha hecho para sacar a los ilegales y detener el desangre ecológico.

Por esta clase de hechos, algunos guardias y líderes de comunidades étnicas han recibido amenazas por parte de grupos ilegales. En febrero de este año, por ejemplo, Las Águilas Negras enviaron un panfleto en el que decía: “Ya tenemos ubicados a todos los sapos de La Toma que se oponen al desarrollo de la comunidad, a que la gente trabaje. Hacen quemar las máquinas. Ya sabemos cómo se mueven las cabezas y sus familias”. Y en octubre de 2014, Los Rastrojos también

hicieron circular sus amenazas.

Sobre esta guardia y las acciones que ejercen, el secretario de Gobierno de Cauca, Amarildo Correa, explica que “hacen parte del derecho y de la autonomía que tienen los pueblos para proteger sus territorios; y en ese sentido, el gobierno departamental los ve con buenos ojos”. No pasa lo mismo con el gobierno nacional. Según Sandra, durante la marcha que las mujeres realizaron en diciembre hacia Bogotá, miembros de la Policía y del Ministerio del Interior les dijeron que en Cauca sólo existía la Guardia Indígena. Pero ese es otro desafío que los afros están dispuestos a superar.

<http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/los-resistentes/5881-los-desafios-de-la-guardia-cimarrona>